
Reunión de los Estados Partes en la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción

12 de octubre de 2010
Español
Original: inglés

Décima Reunión

Ginebra, 29 de noviembre a 3 de diciembre de 2010

Tema 9 del programa provisional

Presentación oficiosa de las solicitudes presentadas en virtud del artículo 5, y del análisis de esas solicitudes

Análisis de la solicitud presentada por Guinea-Bissau de prorrogar el plazo para terminar de destruir las minas antipersonal de conformidad con el artículo 5 de la Convención

Presentado por el Presidente de la Segunda Conferencia de Examen en nombre de los Estados partes encargados de analizar las solicitudes de prórroga

1. Guinea-Bissau ratificó la Convención el 22 de mayo de 2001. La Convención entró en vigor para Guinea-Bissau el 1º de noviembre de 2001. En su informe inicial de transparencia presentado el 19 de junio de 2002, Guinea-Bissau señaló las zonas bajo su jurisdicción o control que contenían, o se sospechaba que contenían, minas antipersonal. Guinea-Bissau está obligada a destruir o a hacer destruir todas las minas antipersonal presentes en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control antes del 1º de noviembre de 2011. El 8 de septiembre de 2010, Guinea-Bissau, al estimar que la labor de reconocimiento en curso podría producir nueva información según la cual sería imposible terminar de cumplir sus obligaciones dentro de ese plazo, presentó al Presidente de la Segunda Conferencia de Examen una solicitud de prórroga del plazo establecido. El 16 de septiembre de 2010, el Presidente de la Segunda Conferencia de Examen escribió a Guinea-Bissau para solicitar más información. Guinea-Bissau dio una respuesta el 22 de septiembre de 2010. Solicita dos meses de prórroga (hasta el 1º de enero de 2012).

2. En la solicitud se indica que el Centro Nacional de Coordinación de la Remoción de Minas (CAAMI) realizó a fines de 2006 una encuesta preliminar para un reconocimiento de las zonas minadas que permitió detectar 278 comunidades contaminadas por minas y otros restos explosivos de guerra (REG). Se indica además que posteriormente se realizó un reconocimiento más detallado, entre octubre de 2007 y mayo de 2008, que identificó 12 zonas afectadas con una superficie total de 2.236.560 m² y 5 zonas de batalla que había que limpiar con una superficie estimada de 930.000 m². Esta es la superficie de las zonas afectadas y no de las zonas minadas. En la solicitud se indica también que durante el reconocimiento se estudiaron las 278 zonas que fueron objeto de la encuesta preliminar, menos 7, y que no se pudieron visitar 16 comunidades por problemas de acceso (carreteras en mal estado) y las inundaciones causadas por las fuertes lluvias. Se indica además que se

han identificado otras 29 comunidades afectadas gracias a los informes de distintas organizaciones no gubernamentales y comunidades.

3. En la solicitud se indica que las tareas iniciales de remoción se centraron en la capital, Bissau, y que se despejó una superficie total de 2.193.020 m² en la ciudad y sus alrededores, destruyéndose 2.654 minas antipersonal, 63 minas antitanque y 37.303 artefactos sin estallar. Una vez que se terminó de despejar esas zonas, la atención se centró en las demás minas y REG de todo el país. En la solicitud se indica que, desde el inicio de las operaciones, se han limpiado los campos de minas de Buruntuma, Binta y Suar, con una superficie total de 1.033.839 m², destruyéndose 397 minas antipersonal, 92 minas antitanque y 104 artefactos sin estallar. Las operaciones de limpieza en Barraca Mandioca (que se han suspendido para realizar un reconocimiento) y Bissabur (en curso) han permitido despejar 83.125,72 m² y destruir 176 minas y 34 artefactos sin estallar. Los Estados partes encargados de analizar las solicitudes presentadas en virtud del artículo 5 de la Convención (en adelante, "el grupo de análisis") observaron que los progresos desde la entrada en vigor no habían sido grandes y que la falta de información detallada sobre el ritmo anual de remoción impedía analizar correctamente si los esfuerzos habían sido constantes o esporádicos.

4. En la solicitud se indica que quedan por limpiar nueve zonas afectadas conocidas, con una superficie aproximada de 1.378.814 m². Esas zonas no representan la superficie de las zonas minadas, sino de las zonas afectadas desde un punto de vista socioeconómico, y aún se han de realizar actividades de reconocimiento técnico y no técnico para determinar la superficie real de las zonas minadas y las necesidades de remoción. En la solicitud se indica además que hay otras 52 zonas en que se sospecha que hay minas y que se deben realizar actividades de reconocimiento para determinar el grado de contaminación de esas zonas. Además existen cinco zonas de batalla principales que se deben despejar, con una superficie estimada de 930.000 m².

5. En la solicitud se indica que al realizarse el reconocimiento de las zonas minadas no se pudieron visitar algunas regiones del país. El Presidente de la Segunda Conferencia de Examen preguntó a Guinea-Bissau si ahora se podía acceder a esas regiones. Guinea-Bissau respondió que creía que Norwegian People's Aid (NPA) accedería a las zonas declaradas inalcanzables en el reconocimiento, ya que la mayoría de las carreteras de la región eran ahora practicables, y que NPA tenía la intención de visitar esas zonas durante la estación seca (de noviembre a mayo). Guinea-Bissau indicó también que NPA estudiaría otros medios para llegar a las zonas de difícil acceso, como motocicletas y bicicletas. Guinea-Bissau respondió asimismo que la situación en materia de seguridad se consideraba "tranquila".

6. Como se ha señalado, la prórroga solicitada por Guinea-Bissau es de dos meses (hasta el 1º de enero de 2012). En la solicitud se indica que, si bien Guinea-Bissau sigue estando segura de que podrá terminar de aplicar el artículo 5 dentro del plazo del 1º de noviembre de 2011, no se sabe bien qué se descubrirá en un próximo reconocimiento que comenzará en septiembre de 2010. La prórroga solicitada de dos meses se basa en que los resultados de ese reconocimiento no estarán disponibles hasta el primer trimestre de 2011 (es decir, después de que se celebre la última Reunión de los Estados Partes antes de que termine el plazo para Guinea-Bissau). En la solicitud se explica además que si los resultados del reconocimiento sugieren que se necesitará más tiempo para terminar de aplicar el artículo 5, Guinea-Bissau presentará entonces una segunda solicitud de prórroga a la 11ª Reunión de los Estados Partes. Ese enfoque evitaría la posibilidad de que Guinea-Bissau incumpla sus obligaciones.

7. En la solicitud se señalan los siguientes obstáculos para la aplicación: a) la capacidad de remoción ha sido insuficiente y los métodos utilizados han sido inadecuados (todas las operaciones de remoción de minas se llevan a cabo manualmente); b) las

operaciones en la estación de lluvias han sufrido retrasos porque los equipos de desminado manual no han podido trabajar bajo la lluvia; c) las zonas restantes no han sido aún objeto de un reconocimiento técnico y existe la posibilidad de que cuando se lleve a cabo esa actividad se identifiquen como minadas algunas zonas que no fueron identificadas como tales durante el reconocimiento inicial; y d) se han utilizado métodos ineficientes (por ejemplo, de manera incompatible con las normas nacionales) y no se han empleado métodos que podrían haber aumentado la eficacia (por ejemplo, reconocimientos técnicos para reducir y cancelar zonas sospechosas). El grupo de análisis tomó nota de que Guinea-Bissau estaba actuando para corregir las deficiencias que había reconocido con respecto a sus tareas anteriores de desminado.

8. En la solicitud se indica que, a fin de obtener una imagen clara del problema restante de minas terrestres y artefactos sin estallar en Guinea-Bissau, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el CAAMI pidieron a NPA que llevara a cabo un reconocimiento general y técnico para verificar el grado de contaminación por minas terrestres y artefactos sin estallar y para aumentar la capacidad de remoción de minas de Guinea-Bissau de manera que pudiera terminar de aplicar el artículo 5 dentro del plazo previsto del 1º de noviembre de 2011. Se indica también que el plan consta de tres actividades principales, a saber: actividades de reconocimiento general, actividades de reconocimiento técnico y actividades de remoción de minas y REG. Todas las actividades de reconocimiento serán realizadas por cuatro equipos de NPA —dos para los reconocimientos no técnicos y dos para los reconocimientos técnicos— y la remoción de minas estará a cargo de tres organizaciones no gubernamentales: HUMAID, LUTCAM y NPA. En el "Plan de Trabajo de Desminado de Guinea-Bissau, 2010-2012", que se adjunta como anexo a la solicitud, se detalla en qué zonas trabajará cada organización y cuándo lo hará.

9. El grupo de análisis observó que, aunque la limpieza de zonas de batalla que no contienen ni se sospecha que contienen minas antipersonal no entraba en el ámbito de aplicación de la Convención, el trabajo en esas zonas tendría que tenerse en cuenta en un plan global de desminado humanitario. En ese sentido, el grupo de análisis observó que en la solicitud no se explicaba de qué forma procedería Guinea-Bissau para limpiar sus cinco zonas de batalla principales.

10. En la solicitud se indica que el reconocimiento general se llevará a cabo entre mediados de septiembre de 2010 y fines de abril de 2011, mientras que el reconocimiento técnico se realizará de septiembre de 2010 a mayo de 2011. El Presidente de la Segunda Conferencia de Examen preguntó a Guinea-Bissau, dado que ya era mediados de septiembre de 2010: a) si esas actividades de reconocimiento habían comenzado, b) en caso contrario, cuándo iban a comenzar, y c) si las fechas previstas de conclusión se verían afectadas. Guinea-Bissau respondió que el reconocimiento general se había iniciado el 20 de septiembre de 2010 y que el reconocimiento técnico comenzaría el 27 de septiembre de 2010. Guinea-Bissau indicó que ese ligero retraso no afectaría el curso normal de las labores y que Guinea-Bissau aún estaba dentro del tiempo asignado para los retrasos imprevistos.

11. El Presidente de la Segunda Conferencia de Examen pidió aclaraciones a Guinea-Bissau con respecto a la contradicción existente entre su afirmación de que "sigue estando segura de que podrá terminar de aplicar el artículo 5 en las zonas minadas conocidas dentro del plazo del 1º de noviembre de 2011" y la afirmación de que "la limpieza de todas las zonas identificadas en el reconocimiento inicial... se llevará a cabo hasta enero de 2012". Guinea-Bissau respondió que la conclusión de la aplicación para el 1º de noviembre de 2011 dependía de tres elementos, a saber: a) que el reconocimiento técnico previsto permitiera restituir una superficie considerable de tierra; b) que los esfuerzos de NPA contribuyesen a agilizar el ritmo de limpieza; y c) la disponibilidad de fondos para

financiar las operaciones, en particular las de la organización LUTCAM. Guinea-Bissau respondió además que si esas condiciones no se cumplían, la restitución de todas las zonas identificadas como minadas en el reconocimiento inicial podría prolongarse hasta enero de 2012.

12. En la solicitud se indica que, mientras que desde el año 2000 todas las actividades de limpieza se han realizado sin llevar a cabo antes un reconocimiento técnico, lo que se ha traducido en un proceso largo e ineficiente, el reconocimiento técnico permitirá definir ahora de manera precisa las zonas que se han de desminar. Se indica también que todas las labores de remoción se llevan a cabo de conformidad con las Normas Internacionales para las actividades relativas a las minas. Además, en la solicitud se indica que se ha adoptado una política de cancelación de tierras a fin de utilizar también los reconocimientos no técnicos (junto con los reconocimientos técnicos y las labores de remoción) para restituir las zonas de presunto peligro. El grupo de análisis observó que la adopción por Guinea-Bissau de un enfoque más eficiente entrañaba que el ritmo de remoción anterior no era indicativo del ritmo que se podía esperar hasta la fecha solicitada para prorrogar el plazo.

13. En la solicitud se indica que la inversión en las labores de desminado en Guinea-Bissau fue de aproximadamente 6,5 millones de dólares de los Estados Unidos entre 2001 y 2004 y de 7,5 millones de dólares entre 2005 y 2009. El Presidente de la Segunda Conferencia de Examen preguntó a Guinea-Bissau si podía confirmar que, como se indicaba en el cuadro que figuraba en la sección II de la solicitud, el país no había invertido ningún recurso propio en la aplicación del artículo 5 y dependía exclusivamente de las fuentes externas. Guinea-Bissau respondió confirmando que el país no había invertido ningún recurso propio en la aplicación del artículo 5, que dependía exclusivamente de los recursos externos y que la única contribución de la propia Guinea-Bissau habían sido los locales del CAAMI y el nombramiento de un director nacional.

14. En la solicitud se indica además que los recursos disponibles para el período comprendido entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011 ascienden a 2.883,974 dólares, divididos entre las organizaciones (NPA: 1,2 millones de dólares; HUMAID: 682.000 dólares, Cleared Ground: 318.000 dólares; LUTCAM: 146.600 dólares, y CAAMI; 537.374 dólares). El Presidente de la Segunda Conferencia de Examen preguntó a Guinea-Bissau si se disponía de todos los fondos o si aún se necesitaban más fondos para la labor que quedaba por realizar, y si Guinea-Bissau podía proporcionar un presupuesto. Guinea-Bissau respondió que no tenía fondos para las actividades de reconocimiento y limpieza de NPA ni para las actividades de remoción de HUMAID para 2011. Más allá de 2011, NPA tenía fondos asegurados para dos años, y no había más información sobre los fondos para HUMAID pasado ese año. Cleared Ground Demining tenía fondos para 2011, y no había más información sobre su financiación después de 2011. El CAAMI aún era financiado periódicamente por el PNUD, y el próximo año necesitaría 500.000 dólares para sus tareas de planificación y coordinación. LUTCAM no disponía de fondos para el próximo año. Por lo tanto, para 2011 existía un déficit de 1.050.000 dólares para las actividades de LUTCAM y el CAAMI.

15. El Presidente de la Segunda Conferencia de Examen pidió más información a Guinea-Bissau sobre lo que cada organización tenía la intención de hacer o lograr. Guinea-Bissau reiteró que NPA llevaría a cabo reconocimientos generales y técnicos y proporcionaría capacidad adicional de remoción de minas, HUMAID y LUTCAM llevarían a cabo actividades de remoción de minas y REG, el CAAMI planificaría y coordinaría las actividades relativas a las minas y Cleared Ground Demining participaría en la destrucción de las municiones obsoletas y en tareas de demolición en pequeña escala.

16. El Presidente de la Segunda Conferencia de Examen preguntó si Guinea-Bissau aportaría recursos para la labor restante. Guinea-Bissau respondió que no proporcionaba recursos financieros, aparte de los locales del CAAMI. El grupo de análisis señaló que, dado que el déficit financiero podría afectar la realización del plan de Guinea-Bissau, se podrían movilizar más recursos si Guinea-Bissau demostrara una mayor apropiación nacional realizando una inversión financiera nacional en la aplicación del artículo 5, de acuerdo con la acuerdos adoptados por los Estados partes en la Segunda Conferencia de Examen. El grupo de análisis señaló además que se podrían movilizar más recursos proporcionando información presupuestaria más detallada sobre los costos no financiados.

17. En la solicitud se indica que 1.140 mujeres, niñas, niños u hombres resultaron heridos o muertos como consecuencia de minas o artefactos sin estallar entre 1963 y 2004. El grupo de análisis observó que Guinea-Bissau había proporcionado en su solicitud datos sobre las víctimas de las minas desglosados por edad y sexo, de acuerdo con los compromisos contraídos por los Estados partes al adoptar el Plan de Acción de Cartagena. En la solicitud se indica además que la remoción ha reducido el riesgo para la población civil, ha sido positiva para la circulación de personas y la disponibilidad de tierras agrícolas, y ha permitido la reubicación de los desplazados internos y la instalación de infraestructuras de comunicaciones. Se indica también que la presencia de minas sigue limitando considerablemente las posibilidades de un mayor desarrollo de las zonas agrícolas y la contribución que pueden hacer esas zonas al crecimiento económico, la creación de oportunidades de empleo y la mejora de la competitividad externa del país, así como la mejora de la calidad de vida de la población local.

18. En la solicitud se incluyen otros cuadros pertinentes que pueden ayudar a los Estados partes a evaluar y estudiar la solicitud, como un censo de las zonas donde se sabe o se sospecha que hay minas, con coordenadas geográficas, un cuadro con el número de personas muertas o heridas, y un calendario para las actividades que quedan por realizar.

19. El grupo de análisis observó que Guinea-Bissau se encontraba en una situación en que, menos de 14 meses antes de que venciera el plazo, aún no estaba claro si podría terminar de aplicar el artículo 5, párrafo 1, de la Convención en el plazo establecido. El grupo de análisis observó además que, aunque era lamentable que después de casi diez años desde la entrada en vigor un Estado parte no pudiera informar de la tarea que le quedaba por hacer, era positivo que ese Estado parte, Guinea-Bissau, se propusiera adoptar las medidas necesarias para que se entendiera la verdadera magnitud de las tareas pendientes y actuar en consecuencia. Además, el grupo de análisis señaló que Guinea-Bissau tendría clara la magnitud de las tareas pendientes cuando concluyera el reconocimiento general, a fines de abril de 2011. Asimismo, el grupo de análisis observó que Guinea-Bissau había actuado de manera prudente al pedir sólo el tiempo necesario para evitar el incumplimiento.

20. El grupo de análisis observó que, aunque Guinea-Bissau había sido lenta en adoptar prácticas eficientes de restitución de tierras y sus progresos hasta la fecha no habían sido grandes, su solicitud de prórroga representaba un compromiso de actuar de manera más eficiente y rápida para terminar de aplicar el artículo 5. El grupo de análisis señaló además que el plan presentado por Guinea-Bissau era viable, pero estaba sujeto a la adquisición de fondos para mantener activas a todas las organizaciones no gubernamentales. En ese sentido, el grupo de análisis señaló que Guinea-Bissau podría movilizar más recursos comunicando con más detalle sus proyecciones de costos para cada una de las organizaciones que figuran en su solicitud y haciendo una contribución nacional a la aplicación del artículo 5.

21. El grupo de análisis observó que el plan presentado por Guinea-Bissau preveía la utilización de toda la gama de medios técnicos y no técnicos para restituir las zonas de presunto peligro que figuraban en las recomendaciones adoptadas por la Novena Reunión de los Estados Partes. En ese sentido, el grupo de análisis señaló la importancia de que

Guinea-Bissau informara sobre sus progresos de manera coherente con los compromisos contraídos por los Estados partes al adoptar el Plan de Acción de Cartagena, a saber, proporcionando información en la que se señale si la tierra se restituye mediante remoción, reconocimiento técnico o reconocimiento no técnico.

22. El grupo de análisis señaló que el calendario incluido en la solicitud ayudaría en gran medida a Guinea-Bissau y a todos los Estados partes a evaluar los progresos entre la fecha actual y el plazo solicitado. A ese respecto, el grupo de análisis señaló que sería útil para todos que Guinea-Bissau proporcionara actualizaciones de ese calendario en las reuniones de los Comités Permanentes y las Reuniones de los Estados Partes.
